

# INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS *Argumentos* INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

## BOLETIN DE COYUNTURA POLITICA Y ECONOMICA

### Argumentos

### Presentación

Esta es una publicación del  
Instituto de Estudios Peruanos  
Año / 1  
Número 1  
Precio S/. 4.00  
Correo electrónico  
IEP.EDIT@IEPPE  
Impreso por GRAFICOS S.R.L.  
Lima, noviembre de 1992

**E**l Instituto de Estudios Peruanos inicia con este número la publicación de un boletín mensual de análisis de la coyuntura política y económica. Los acontecimientos en nuestro país transcurren vertiginosamente. En una experiencia que no reconoce precedentes en América Latina, la discusión ha evolucionado en pocos meses desde la explicación de las razones de un golpe de estado, que condenamos, a la consideración de las posibles salidas institucionales. El país se encuentra sacudido por la violencia y para enfrentarla requiere del concurso organizado de la sociedad civil. La pobreza y la exclusión se extienden dramáticamente.

En juego es la viabilidad del país. Algunos temas defienden posiciones que provocarán polémica pero ello no va en desmedro de la consideración, que nos merece nuestros ocasionales adversarios.

**E**l Instituto de Estudios Peruanos asume como principios la defensa de la democracia representativa y el estudio de las vivencias, criterios y valores que definen nuestra identidad nacional y cultural.

Desde este terreno común en el cual hemos trabajado juntos por largos años, cada uno de nuestros investigadores defiende opiniones que no necesariamente van a coincidir con sus colegas y compañeros de trabajo. Estamos convencidos de las ventajas de esta actitud pluralista, así como la urgencia y preocupación de todos por definir consensos, a los que llegamos en los temas fundamentales. Queremos tender puentes, escuchar, proponer, discutir, con políticos y juristas; integrantes de sindicatos, gremios empresariales y otras organizaciones sociales, universitarios, público interesado. Esperamos que esta publicación, contribuya al debate y la búsqueda de soluciones.

COMITE EDITORIAL  
Carlos Iván Degregori  
(coordinador)  
Jaime Urrutia  
Francisco Verdera

COMENTARISTAS  
Roxana Barrantes  
Cecilia Blondet  
Julio Cotler  
Jürgen Golte  
Efraín Gonzales de Olarte  
Carlos Mejía  
Teobaldo Pinzás  
Lucía Romero  
Fernando Rospigliosi  
Carolina Trivelli

COLABORADORES  
Luis Miguel Glave  
Mariana Llona  
Aldo Olano  
Rafael Varón  
Carmen Yon  
Patricia Zárate

**A**nte la presencia de todos estos hechos remecedores, nuestro instituto entiende que debe combinar la reflexión académica de largo plazo con el análisis y la discusión de alternativas que se plantean semana a semana, en ocasiones día a día. Confiamos que, aunado a otros esfuerzos contribuya a que se vaya creando un ambiente de diálogo y respeto mutuo, exigencia apremiante cuando lo que se encuen-

# EL GOLPE DE ESTADO DEL 5 DE ABRIL Y LA SITUACION ACTUAL.

## 1 El golpe y la discutible transición<sup>1</sup>

El Perú en siete meses se encuentra enfrentado a dos instancias que se superponen sin que pueda definirse todavía ante la situación en que nos encontramos: una línea de continuidad o un cambio obligado de orientación; la legitimación del golpe de estado o una salida a través de la convocatoria al congreso constituyente. El gobernante no quería este desenlace por el temor de no obtener mayoría absoluta o de cambios de posición a mediano plazo de quienes en principio lo apoyan. Los partidos mostraron su renuencia a la participación porque el procedimiento no les ofrecía adecuadas condiciones de transparencia y algunos estimaban que en el ambiente social existente sería muy probable un resultado adverso que acentuaría su grado de aislamiento. La transición formal no tiene condiciones de estabilidad cuando los interesados no han llegado a niveles mínimos de acuerdo.

La interrupción del régimen democrático, como se sabe, reconoce antecedentes en los reiterados ataques de Fujimori a las instituciones representativas y al Poder Judicial y se precipita por una percepción de amenaza compartida por el gobierno y las Fuerzas Armadas.

El gobierno toma esta decisión ante hechos que a su criterio amenazaban la continuidad de la política del régimen por diversas demostraciones de oposición parlamentaria. Ante esta situación el recurso seguido por Fujimori fue atacar sistemáticamente a los ya desprestigiados congreso y partidos políticos. El golpe se desencadena por la inminente convocatoria a una comisión investigadora del congreso a raíz de las denuncias de corrupción realizadas por la esposa de Fujimori que involucraba a parientes cercanos del gobernante.

Las Fuerzas Armadas también apreciaban la coyuntura en términos de amenaza. Fujimori probablemente influía para que los militares llegaran a esta conclusión. Los argumentos se sustentaban en el avance de Sendero Luminoso, tanto en algunos barrios populares de la ciudad como en el campo. Algunos mandos consideraban que la lucha antisubversiva no contaba con un respaldo efectivo por parte de la sociedad civil y que resultaban contraproducentes los intentos de concertación con partidos y organizaciones. Les preocupaba también las críticas por su participación en violaciones de los derechos humanos y los casos de corrupción, lo que restaba eficacia a sus acciones y creaba una situación incontrolable. Sectores de las Fuerzas Armadas entendían que el golpe les iba a permitir una mayor discrecionalidad en sus acciones.

Sin embargo, un examen de los sucesos que tienen lugar en

la coyuntura previa al golpe demuestra que el gobierno no se encontraba en una situación sin otras alternativas, como se argumentara para convencer a la ciudadanía. En el parlamento diferentes fuerzas políticas llegaron a acuerdos con el gobierno sobre los principales lineamientos de la política económica. Boloña había logrado evadir las trabas que se le presentaban con el apoyo del PPC, Libertad, Cambio 90 y sectores de AP. El ejecutivo tenía condiciones para establecer una mayoría favorable en el congreso, pero no existía en Fujimori la voluntad política para lograr este objetivo.

El golpe del 5 de abril provoca una adversa reacción internacional. La reunión *ad hoc* de cancilleres de la OEA se pronuncia por un pronto restablecimiento del orden constitucional sin excluir a ninguna fuerza política legal. Es probable que el gobierno no haya evaluado con los suficientes elementos de juicio la respuesta internacional. Resulta razonable pensar que antes de tomar estas medidas el gobierno haya consultado a sectores de los gobiernos de otros países pero no fue capaz de realizar una evaluación global. Fujimori y el hermético grupo de asesores cercanos, quizás pensaban en los escenarios de las décadas del sesenta y setenta y el temor de los países hegemónicos ante situaciones de ingobernabilidad provocadas por movimientos subversivos. Sin embargo, un golpe de estado en el Perú en caso que no se respondiera con

1. Por ser el primer número de esta publicación entendemos necesario analizar el período que se abre en el país a partir de los sucesos del 5 de abril. En los números siguientes examinaremos más detalladamente los sucesos principales que ocurren mes a mes.

un rechazo explícito podía influir en acontecimientos con desenlaces difíciles de controlar en Venezuela, Brasil y Argentina. El gobierno de Fujimori probablemente consideró que iban a darse juntos la condena formal y el apoyo en los hechos. Bastaba para ello que se dieran señales claras de la voluntad de proseguir con la re inserción en el sistema financiero internacional y la aplicación estricta de un programa neoliberal.



### Los aliados de Fujimori

Con el golpe termina de establecerse una suerte de "triple alianza" alrededor del gobierno: Fuerzas Armadas, empresarios y sectores populares desorganizados. Fujimori se ubica en el centro, entablando acuerdos con estos tres actores. Un elemento fundamental para el establecimiento de este pacto ha sido un discurso presidencial de rechazo a las dirigencias políticas que recuerda las viejas teorías del no-partido en la época de Velasco. El argumento encuentra asidero en el sentido común debido a la ya creciente desarticulación de los partidos políticos.

En el establecimiento de fuertes lazos entre el ejecutivo y los altos mandos militares ha jugado un papel importante la promoción y cooptación de nuevos oficiales a puestos claves en la jerarquía militar. Influye también en la conducta de las

Fuerzas Armadas las reivindicaciones económicas, entre ellas, aumentos salariales de la oficialidad, ampliaciones presupuestales para la guerra interna y proyectos de desarrollo.

La alianza con los empresarios resultó más difícil de concretar, en tanto no lograba disiparse la desconfianza y temor a la política neoliberal que desarrolla el gobierno. Las medidas en materia de legislación laboral, antes y después del golpe, que hubieran motivado un cuidadoso debate en el parlamento, ayudaron a vencer recelos y desconfianzas. En el mediano plazo suponen que van a estar en condiciones de presionar con mayores posibilidades para que sus demandas económicas sean atendidas como reconocimiento a la posición asumida el 5 de abril.

Los repetidos discursos de Fujimori contra las dirigencias partidarias y el congreso concitaron el respaldo de la mayoría de la opinión pública. Los sectores de bajos ingresos recogieron la promesa de orden y eficacia y se identificaron con gestos simbólicos como la distribución de pequeñas cantidades de dinero, alimentos, máquinas o herramientas que buscaban crear las bases de una relación clientelista. Las seguridades que se asocian a la relativa estabilidad de las variables económicas y a la lucha contra la corrupción ayudan a que Fujimori logre el apoyo entusiasta de clases medias y altas que votaron contra él en 1990 y ahora se enfrentan a Vargas Llosa.



### Las vacilaciones de la oposición política

En los primeros momentos del gobierno de facto, la oposición no logra articular respuesta alguna que trascendiera la denuncia en términos de principios y valores. Solo cuando el gobierno suspendió las elecciones municipales Acción Popular, a través de Fernando Belaúnde, encontró una reivindicación política con posibilidades de congregarse a la sociedad en contra de la dictadura. El resto de los partidos —en una actitud defensiva ante una opinión política adversa y en los primeros meses agresiva— parecía esperar que fueran las presiones del exterior las que auspiciaran un retorno a la constitucionalidad.

La profundización de la crisis logra al fin que diversas fuerzas políticas puedan converger alrededor de algunos puntos y acciones en común en contra del gobierno y a favor del restablecimiento del régimen representativo.

Fujimori ha impulsado por varios meses una política ambigua de compromisos internacionales de diálogo con los partidos y ataque a estas organizaciones. Ellas han caído en parte en el juego establecido, perdiendo iniciativa y capacidad

de propuesta. Por un muy corto lapso, se tendieron puentes que trataban de obligar al gobierno a respetar compromisos y a la oposición a encontrar una oportunidad para elaborar una agenda de salida institucional. Fujimori, en este contexto, estimó que se lo empujaba fuera del escenario que anteriormente había sometido a su control y asimismo, que de evolucionar la situación en estos términos iba a encontrar crecientes dificultades para imponer cambios de orientación bruscos y apartamiento de los acuerdos logrados, tal como había sido su estilo hasta entonces. El Decreto legislativo 25.684 se publica en la misma fecha que culminaba el diálogo y constituye una demostración inequívoca que existía una corriente opuesta al establecimiento de una verdadera negociación.

En esta compleja situación los partidos parecen estar comprendiendo gradualmente que —al margen que decidieran o no presentarse a las elecciones del congreso constituyente— no pueden continuar delegando su responsabilidad en otros: la comunidad internacional o sectores de las Fuerzas Armadas. En este último caso una de las consecuencias no queridas sería la afirmación de una salida autoritaria.



### **Cambios en la estrategia de Sendero Luminoso y la captura de Abimael Guzmán**

En el plano de la lucha antisubversiva la captura de Abimael

Guzmán constituye evidentemente el más duro revés sufrido por esta organización desde el inicio de sus acciones armadas, aún mas grave — por las características de su liderazgo — que la muerte de parte de sus principales dirigentes en las intervenciones en las cárceles en 1985 y 1992. Sin embargo, este éxito policial no significa el fin de la violencia política e incluso es probable que el país agraviase etapas de su exacerbamiento. La situación no permite alentar fáciles optimismos, aunque es probable que se produzca escisiones políticas en la organización terrorista tanto por razones ideológicas y de estrategia guerrillera como por el control de los recursos económicos provenientes de la zona del Huallaga. La jefatura de Abimael Guzmán aseguraba la unidad de propósitos y actuaba como factor de contención de cualquier discrepancia, incluso porque ella podía reprimirse violentamente sin costo alguno.

Las recientes encuestas indican que la mayoría de la población considera que la captura del máximo dirigente de Sendero Luminoso es un éxito de la DINCOTE y que no tiene vinculación con la instauración del gobierno de facto del 5 de abril. Ello no impide que Fujimori gane apoyo en la opinión pública pero probablemente las bases de esta adhesión resulten por lo expuesto más precarias que cuando decide interrumpir el régimen constitucional<sup>2</sup>.

La nueva situación en la lucha antisubversiva fortalece estilos de actuación en la que coinciden las Fuerzas Armadas y Fujimori. En efecto, en la llamada "acción cívica" se confunden intencionalmente la guerra psicológica con la cooptación política. El populismo del gobernante para conquistar votos puede contar con el

aval de la institución militar, que ha decidido también a intervenir más activamente en la campaña electoral. El contexto actual supone graves peligros porque se desacredita al mismo tiempo a los representantes de los partidos políticos como a los dirigentes de organizaciones sociales que no son afectos a la orientación del régimen, calificándolos en algunos casos de subversivos. Parecieran existir dos racionalidades: la que ubica el desmantelamiento de Sendero Luminoso como un problema de inteligencia policial y restablecimiento de vínculos con la sociedad civil frente a los que invocando una perspectiva presuntamente más integral tratan de sacar rápidamente ventajas electorales tratando a los opositores como enemigos del sistema.



### **Confusos escenarios de transición**

Como es sabido, en aquellos regímenes donde no existe una sensación de representación política auténtica por parte de la población, diversos grupos sociales articulan su apoyo al gobierno en la medida que reciben beneficios materiales. En este caso nos encontramos con un escenario donde la legitimidad descansa en una racionalidad instrumental antes que en la aceptación de una serie de *procedimientos* que dan carácter democrático al régimen político.

En las actuales circunstancias no existe voluntad por parte del gobierno para el retorno a las instituciones que sustentan el Estado de Derecho. Fujimori tanto como Boloña tienen una profunda desconfianza respecto de la delegación de responsabilidades en el manejo de la admi-

2. Un análisis detallado se encuentra en el artículo "Sendero Luminoso acusa los golpes" de Carlos Iván Degregori.

nistración. estatal, recurriendo solamente a un estrecho círculo de asesores. La situación política se vuelve más compleja todavía por la imprevisibilidad que surge como resultado de una excesiva acumulación de poderes en torno a un cada vez más reducido grupo de personas.

En el mes de setiembre, antes de la captura de Abimael Guzmán, podíamos observar algunas fisuras en el "triángulo" de alianzas establecido por Fujimori. La disidencia de los industriales era creciente a partir de la bancarrota del aparato productivo. En el momento actual la sensación de alivio provocada por las recientes derrotas de Sendero Luminoso interrumpe el proceso de demandas y reivindicaciones que estos sectores estaban planteando. Se trata probablemente de una situación temporal en la medida que no aumente significativamente la inversión externa y continúe la recesión económica. Fujimori confía que esta situación consensual pueda prolongarse hasta el 22 de noviembre. En cambio con las Fuerzas Armadas por las razones aludidas el gobierno ha establecido acuerdos más duraderos. Finalmente, en los sectores de bajos ingresos y parte de las clases medias, sigue planteada la interrogante de el tiempo por el que puede prolongarse este respaldo al gobernante de facto. Los cuestionamientos a la llamada "clase política tradicional" están dejando de ser una explicación de los problemas del país que aglutine voluntades.

Una eventual disminución de las acciones terroristas colocarán en primer plano los efectos recesivos de la política neoliberal. Un grupo neurálgico de la población como es el caso de los ahorristas de las numerosas mutuales han sido desatendidos

por el gobierno sin siquiera ofrecer soluciones a mediano plazo a su situación. Otra vez como en el caso de los empresarios, el gobierno espera que el contexto se mantenga sin alteraciones drásticas hasta el 22 de noviembre.

El apoyo de los tres ejes mencionados: Fuerzas Armadas, empresarios y sectores populares desorganizados continua siendo la base para la aplicación de un populismo de derecha. Las demostraciones del gobierno indican que continuará orientando el superávit fiscal para fortalecer sus relaciones clientelísticas con la población como parte de una campaña de apoyo a sus candidatos al congreso constituyente.



### **Las condiciones para una salida institucional**

La convocatoria e instalación de un congreso constituyente es una salida que Fujimori percibía con temor y aún ahora no se encuentra seguro de los resultados definitivos. La percepción de amenaza a la que aludimos al principio continuaría en este nuevo contexto.

Hasta la captura de Abimael Guzmán, el gobernante buscaba canalizar y controlar a la mayoría de independientes con Cambio 90 y Nueva Mayoría. Después del 12 de setiembre Yoshiyama se presenta decididamente como el candidato oficial del gobierno. Pero la vigencia de Cambio-90 precipita una alianza entre las listas oficialistas que en principio el gobernante rechazaba. A Fujimori le preocupa que políticos del anterior congreso o líderes emer-

gentes tomen los principales elementos de su discurso y en un probable escenario futuro de desgaste del régimen, asuman posturas de oposición. En la medida que por las características de la campaña electoral va a tener extrema importancia el voto preferencial es posible que exista una alta dispersión de los votos y una situación incontrolable para el gobernante.

Las salidas del régimen son presionar a los medios de comunicación para establecer "filtros" en relación a las candidaturas y concentrar la publicidad en Nueva Mayoría y Cambio-90 para no incurrir en el error que representaría la presentación de adherentes de bajo perfil, que debiliten a la posición oficial Sin embargo, este estilo de mostrar una imagen sin relieves de los candidatos adictos al régimen, concentra excesivamente la campaña electoral en Fujimori y pone a prueba su capacidad de endose con respecto a postulantes que él mismo los empuja deliberadamente a un segundo plano. Por otro lado, están surgiendo grupos políticos que pueden tener vigencia usufructuando el hecho de haber sido sus principales candidatos, dirigentes de partidos que han adoptado una actitud abstencionista, Rafael Rey en caso de Libertad y Barba Caballero en el APRA. El primero tiene una orientación concordante con el gobierno pero no ofrece garantías de un seguimiento incondicional al titular del ejecutivo. Barba Caballero si quiere concitar la adhesión de apristas que no comparten la línea de sus dirigentes, tiene que definirse por una orientación más decididamente opositora.

Los partidos políticos se encuentran en una compleja disyuntiva. El Partido Popular Cristiano no quiere quedarse al margen de un escenario de toma de decisiones como es el congreso constituyente. La pérdida de influencia en un ámbito oficial va en contra de la tendencia conservadora de su electorado. Esta opción sin embargo, tiene entre sus costos, deserciones al interior de sus filas por militantes que argumentan que la agrupación no se ha renovado, por candidatos que entienden que merecen una mejor posición por su trayectoria política, o bien, integrantes que se sienten inclinados por la no participación.

Acción Popular y el APRA aspiran a mantener presencia política por el acceso a los gobiernos locales y al mismo tiempo deslegitimar el congreso constituyente. Sabedores que los municipios no son contrapesos eficaces en relación al conjunto de instituciones representativas, su opción es al mediano plazo. El SODE en cambio considera que la participación en el congreso constituyente es una decisión realista en la medida que les permitirá tener presencia política y eventualmente ser puentes y articuladores de una voluntad de transición, entre un sistema político reconstruido sobre bases endebles y partidos que van perdiendo márgenes de actuación en la escena pública.

Diversos partidos y grupos nucleados en el recientemente formado Movimiento Democrático de Izquierda deciden intervenir ante el temor de perder vigencia política. Su orientación no parecen estar a tono con el nuevo clima político que

ofrece el país. Si bien existe renovación en su lista de candidatos, la campaña se centra en las figuras más conocidas quienes se encargan de ofrecer propuestas con un discurso y un perfil en extremo tradicional.

El FIM y el FRENATRA-CA serán quizás los grupos más proclives a variar de orientación, según las percepciones que tengan del gobierno, la opinión pública y los grupos de intereses.

La prohibición de reelección de los congresistas por un período, además de transgredir derechos constitucionales, trava el proceso de surgimiento de nuevos liderazgos políticos que el gobierno dice defender; los cambios no pueden en este marco consolidarse, apostándose así a una extrema volatilidad cuyo propósito es, otra vez, fortalecerla voluntad del ejecutivo.

Los partidos políticos, si quieren recuperar la credibilidad perdida, deben demostrar su disposición a democratizarse y la preocupación por renovar sus cuadros dirigenciales. Las perspectivas de retorno a la democracia exigen que el desgaste del gobierno no sea campo de avance para la influencia de corporaciones como las Fuerzas Armadas y aún otorgue oportunidades a la subversión de proseguir con sus acciones a niveles comparables a los años anteriores.

La estrategia del gobierno desde antes del 5 de abril, exacerbada después de esa fecha, ha consistido en provocar el enfrentamiento entre liderazgos personales y presuntas cúpulas políticas. Pulverizar representaciones y utilizar un discurso contra los partidos y la sociedad civil —como probablemente lo hagan muchos de los candidatos— resulta la estrategia más adecuada para aquellos

que consideran que para aplicar una política neoliberal se, requiere afirmar el autoritarismo. Fujimori quiere por todos los medios que el país retorne a los días posteriores al 5 de abril. Un peligroso logro en esta dirección es el desdibujamiento de las posibilidades de alternancia política.

Sin embargo, si el gobierno no consigue mayoría absoluta o ésta es obtenida por un escaso margen tendrá que ingresar en el juego político que rechaza: controlar disidencias, imponer o persuadir, calcular cuidadosamente si un proyecto va a ser finalmente aprobado, encontrarse al fin con nuevos límites que con la decisión del 5 de abril había supuesto traspasar definitivamente. Anticipándose a esta temida posibilidad y procurando contrarrestarla coloca nuevos temas en la agenda que distorsionan el contenido de la campaña, como el referéndum sobre la pena de muerte y procura deliberadamente hacer que para todos los grupos políticos llegar al 22 de noviembre sea una suerte de carrera contra el reloj. La lista oficial tendrá oportunidad de ser conocida; las demás deben emprender múltiples tareas, no sólo difundiendo sus proyectos sino cuidando la transparencia de los procedimientos. Esta situación reduce dramáticamente los espacios de debate y con ello restringe las oportunidades para que la mayor parte de la ciudadanía conozca lo que se encuentra en juego en las elecciones al congreso constituyente y pueda votar en consecuencia con niveles aceptables de información.

El Perú no está dando los pasos para una transición realista y los conflictos tenderán a agravarse después del 22 de noviembre.

# LA ECONOMIA DESPUES DEL GOLPE

**E**

l golpe del 5 de abril no sólo cambió la escena política del país; esta decisión tuvo también importantes consecuencias sobre las principales variables macroeconómicas.

**Lucía**

**Romero**

La producción entra en la fase más dramática

del proceso recesivo de los últimos años. El tipo de cambio real que venía cayendo desde diciembre del año pasado recupera el nivel previo a esta caída. Y la tasa de inflación baja sustancialmente porque el gobierno pone especial énfasis en aproximarse a la única meta que quedaba bajo su control, ya que en el frente externo había experimentado un considerable retroceso.

## **L** a recesión dentro de la recesión

La caída de la producción en enero-setiembre fue de -3.2%, con respecto a igual período de 1991. Este hecho se suma a la recesión que ya venía experimentando el aparato productivo desde 1988. La magnitud de esta crisis se expresa en un PBI en 1991, 21 % menor que en 1987.

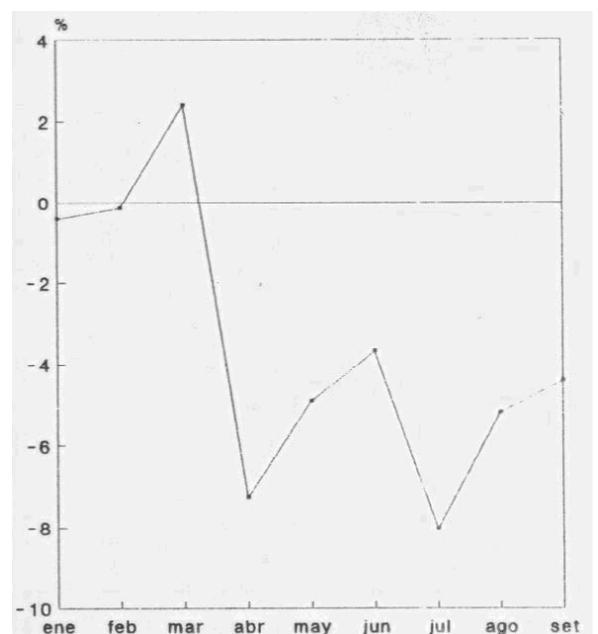
En lo que va del año, todos los sectores productivos, salvo construcción cayeron en porcentajes similares. Por ello, esta crisis no puede atribuirse sola-

mente al impacto del clima y a la falta de lluvias. Estos factores serían responsables, en todo caso, de la baja producción en la agricultura, ganadería, pesca, en la industria procesadora de las materias primas de estos sectores y en el sector electricidad. La caída de la demanda interna y la pérdida de competitividad en el mercado externo explican la recesión en el conjunto de la economía.

Según los resultados de la encuesta realizada en el mes de agosto por la Oficina de Estadística Industrial del MICTI sobre los factores que afectan la producción manufacturera, el 35% de los empresarios señaló la falta de demanda, 11% la falta de crédito, 25% el problema energético, 11% el desabastecimiento de materias primas y otro 11% la obsolescencia de la maquinaria y equipo. Es decir, casi el 50% de los entrevistados consideró que la caída de la producción industrial se debía a causas derivadas de la política económica restrictiva: demanda insuficiente y escasez de créditos.

A la reducción del consumo, como consecuencia de la disminución del empleo público y privado y del mantenimiento de los salarios reales en niveles muy bajos, se añade desde abril la "sequía" de créditos y los reiterados superávits fiscales. El golpe motivó, de un lado, una corrida de los depósitos bancarios que junto al alto índice de morosidad de las empresas redujo la liquidez y los créditos; de otro lado, el sobreajuste fiscal, frente a la interrupción de

**VARIACION % DEL PBI REAL**  
respecto a igual mes año anterior

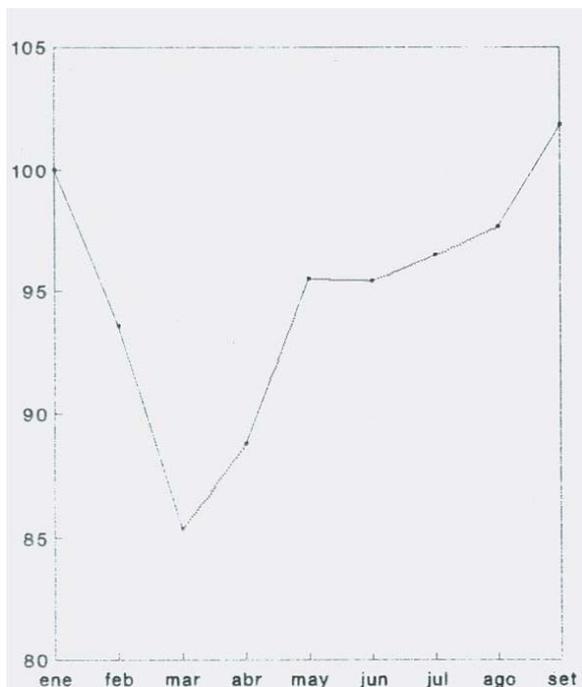


los flujos financieros del exterior. Según declaraciones del ministro de economía, "después del 5 de abril fuimos más cautos porque no sabíamos lo que pasaría".

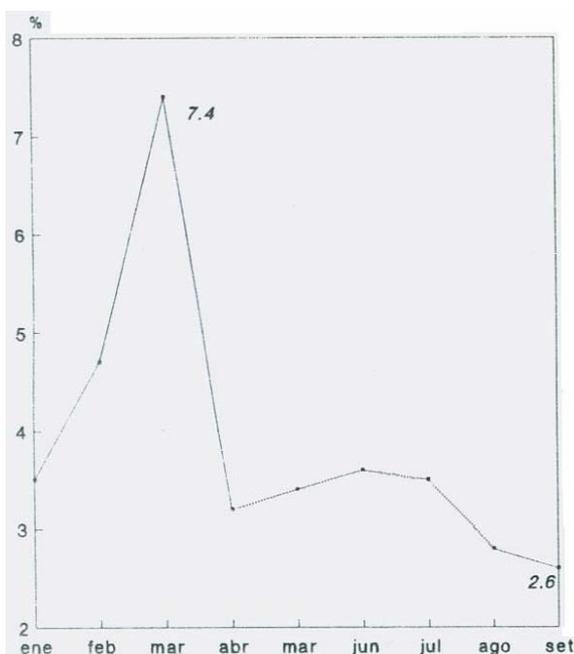
## **L** a precaria recuperación del tipo de cambio

Si bien es cierto que desde abril el tipo de cambio real se recuperó sistemáticamente, el atraso cambiario persiste y a niveles muy significativos.

**TIPO DE CAMBIO REAL**  
(enero de 1992 = 100)



**TASA DE INFLACION MENSUAL**  
1992



La recuperación del tipo de cambio real se originó en la crisis de desconfianza desencadenada a raíz del golpe. El retiro de 225 millones de dólares de los depósitos de la banca comercial son prueba de ello; hasta fines de agosto aún no habían retornado la totalidad de los depósitos fugados, a pesar que en mayo las empresas efectuaron los depósitos por concepto de compensación por tiempo de servicios (CTS) que son de carácter compulsivo y prácticamente inamovibles.

La corrida de depósitos acentuó la grave falta de liquidez del sistema financiero. El Banco Central, frente a ello, modificó ligeramente la política monetaria. A partir de abril la emisión se elevó sistemáticamente por encima de la tasa de inflación. A pesar que el nivel de las compras de dólares por parte del Banco Central no se alteró significativamente, la inyección de dinero a través de la expansión del crédito a la banca comercial, para impedir que las tasas de interés aumenten, habría elevado el tipo de cambio.

Otro elemento que habría jugado un rol importante en la subida del precio del dólar de los últimos meses es el cambio de portafolio del sector privado. La expectativa de mayor devaluación junto a la mayor liquidez en nuevos soles del sistema bancario — que redujo ligeramente las tasas activas en moneda nacional— habrían llevado a que las empresas cuyos ingresos no están dolarizados cambiaran una fracción de sus deudas de dólares a nuevos soles, para lo cual salieron a com-

prar dólares en el mercado de Ocoña. Según un gerente de un importante banco privado, el cambio de deudas a nuevos soles fue de 70 a 80 millones de dólares, lo que representa alrededor del 4% del total del endeudamiento en moneda extranjera (que a su vez constituye alrededor de 70% de los créditos totales).

Este aumento de la liquidez en moneda nacional del sistema bancario fue consecuencia, del supuesto paquete reactivador del gobierno frente a las elecciones al CCD. En primer lugar, hubo un aumento de gasto del gobierno a través del incremento de remuneraciones, después de un largo período de deterioro. En segundo lugar, se amplió el período de control de encaje bancario, tanto en moneda nacional como extranjera, de 15 a 30 días. Finalmente, ha influido también la transferencia de los fondos del Fonavi a la banca asociada y la descentralización de la recolección de impuestos en favor de dicha banca, mediante un convenio suscrito con la SUNAT y SUNAD.

**L a gran meta: inflación de 2% para diciembre**

Después de marzo, en que la inflación se elevó por efecto del paquete tributario, ésta comenzó a caer hasta alcanzar en setiembre, no sólo la tasa más baja del actual régimen sino también, la más baja desde mayo de 1980. Este "logro" se debió

principalmente a la caída de la demanda, debido a que los comerciantes se vieron obligados a bajar sus márgenes de comercialización para compensar la caída en sus ventas. No es casual que en los meses de menor nivel inflacionario (agosto y setiembre), la tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor fuese mas alta que la del índice de precios al consumidor.

Adicionalmente, se debe mencionar la reciente preocupación gubernamental por el impacto inflacionario que tendrían los reajustes de las tarifas públicas. Es así, que a pesar que las tarifas fueron "liberalizadas" desde junio, el gobierno resolvió impedir el último reajuste, provocando un ligero retraso de los precios públicos para compensar el efecto inflacionario de la elevación del tipo de cambio, considerando que se estaba en los meses previos a las elecciones al congreso constituyente.

## **C** risis financiera y crisis externa

La agudización de la recesión ha ido acompañada del debilitamiento del sistema financiero con la quiebra de varias instituciones y la amenaza latente de una crisis de balanza de pagos.

Hasta el momento, alrededor de 30 instituciones financieras (entre bancos, mutuales, cooperativas y financieras) han sido intervenidas o están en proceso de liquidación; de este total más de las tres cuartas partes han quebrado después del 5 de abril. Esta crisis del sistema

financiero se desató porque al alto índice de morosidad de las empresas — como consecuencia de la prolongada recesión en un contexto de tasas de interés sumamente altas — se añadió el retiro masivo de los depósitos.

Según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros, al 31 de agosto, el porcentaje de la cartera pesada (créditos vencidos y en cobranza judicial) sobre el total de colocaciones brutas de la banca comercial ascendía a 16.5%. Vale la pena hacer notar que este ratio esconde la magnitud real del problema ya que no considera los créditos vencidos que han sido refinanciados.

En el sector externo, los indicios de que se está gestando una crisis de balanza de pagos son bastante claros. La balanza comercial registró un déficit de US\$ 301 millones en el primer semestre de 1992 (según datos preliminares del BCR). Al "boom" de importaciones provocado por la liberalización comercial se ha sumado la necesidad de importar alimentos para compensar la caída de la producción agrícola.

A esta situación de la balanza comercial hay que agregar los efectos de la paralización de los ingresos de capital privado y la suspensión de los préstamos del Grupo de Apoyo a partir del 5 de abril. La amenaza de esta crisis parecía haberse atenuado después que el 24 de setiembre se aprobara el préstamo del BID por US\$ 222 millones, (que incluye un cofinanciamiento de Japón por US\$ 100 millones), para la reestructuración del sistema financiero. Sin embargo,

hasta la fecha no se tiene conocimiento de que se haya efectuado desembolso alguno.

## **E** l presunto relanzamiento del programa

Frente a la grave situación del aparato productivo y tomando en cuenta la proximidad de las elecciones al CCD, el 16 de agosto, el Ingeniero Fujimori anunció el llamado "relanzamiento del programa económico". Las principales medidas fueron un aumento de sueldos para los empleados públicos de los sectores salud y educación y para las fuerzas armadas y policiales; la compra de la cartera pesada de la banca comercial por US\$ 100 millones y el otorgamiento a ésta de una línea especial de crédito por igual monto a tasas de interés atractivas. Se prometió, además, la ejecución de una serie de obras de infraestructura como carreteras, electrificación, saneamiento y salud por un monto total de US\$ 150 millones.

Según cifras estimadas por algunos técnicos del Ministerio de Economía, el efecto neto del programa anunciado sobre el PBI sería solamente de 0.2%. Si a esto se añade que no todo lo propuesto está siendo cumplido, el pretendido efecto reactivador es simplemente una estrategia de corto plazo motivada por la necesidad de un apoyo electoral significativo en los comidos del 22 de noviembre.

# CAMBIOS EN EL MODELO EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS AZUCARERAS

**E**n los últimos meses se ha suscitado una polémica sobre el futuro de las cooperativas agrarias, especialmente de las azucareras.

**Carolina Trivelli**

La discusión cobra vigencia a raíz de la intervención de dos cooperativas agrarias azucareras (CAA's) del departamento de Lambayeque en mayo pasado: Pucalá y Cayaltí son intervenidas por representantes del gobierno regional, aduciendo que se buscaba el colapso financiero. Esta decisión pone en evidencia la grave situación que venían soportando los complejos azucareros desde hace varios años. El punto desencadenante ha sido la cuantiosa deuda con el Estado (IGV, IPSS), que, en los años precedentes, había sido refinanciada, condonada, o simplemente, olvidada. Sin embargo, el problema es más complejo, involucrando problemas que no se limitan a la escasez de recursos, como parece sostener el gobierno.

Las autoridades gubernamentales proponen, como única salida, la conversión de las cooperativas en sociedades anónimas. La idea subyacente, es que si las CAA's cambian de sistema empresarial (entendido sólo como régimen jurídico) podrían conseguir apoyo crediticio, nacional y extranjero. Lograrían además una transfor-

mación en el sistema de toma de decisiones al adoptar la estructura accionaria propia de una empresa privada.

Esta opción no ha tenido la acogida esperada; sólo las azucareras de Chucarapi y San Jacinto han iniciado los trámites para el cambio de régimen empresarial. Por su parte, Casagrande, la CAA más grande del país, y Cartavio realizaron consultas entre sus asociados para decidir al respecto y, en ambos casos, la opción por el cambio fue rechazada. En las restantes aún no se logra ni siquiera el mínimo de firmas necesarias para convocar a la consulta.

Para el gobierno, la negativa de los cooperativistas al cambio se debe a la manipulación política ejercida en la zona por algunos partidos. En otros términos, los socios no se estarían dando cuenta de las limitaciones que enfrentarán y de las consecuencias de su decisión en términos de apoyo gubernamental.

Desde el punto de vista de los trabajadores de las CAA's la situación no parece tan sencilla de caracterizar en los términos definidos por el gobierno. Si bien son conscientes de la gravedad de los problemas que enfrentan, la idea del cambio a sociedades anónimas presenta puntos aún por definirse y, es obvio que, una decisión en tal sentido no es condición suficiente para conseguir crédito ni para atraer inversiones.

Uno de los principales problemas que ofrece la conversión en sociedades anónimas es

el procedimiento con que se asignarían las acciones. Debe tomarse en cuenta que se trata de complejos agroindustriales, es decir, tierra y activos (maquinaria, fábrica, comercializadoras, etc.), lo que plantea problemas sobre la forma de distribución. El criterio para la asignación podría ser, según varios especialistas, el tiempo de trabajo en la empresa.

Con las acciones repartidas entre los socios, el panorama no sería del todo distinto a la situación anterior. Aun de asumirse qué la repartición hubiera sido "justa", tendríamos una empresa con muchos pequeños accionistas. Esta entidad ofrecería sus activos como garantía para conseguir préstamos, o podría hacer una ampliación de capital y permitir la entrada de nuevos capitales y socios. Todo esto con el fin de conseguir recursos líquidos para reactivar la empresa.

Pero ¿cuáles serían las consecuencias de estas opciones? Lo más probable es que los nuevos capitales (suponiendo que ingresen y en la magnitud necesaria), dado el alto nivel de riesgo exigirían fuertes garantías a cambio de préstamos, y elevados rendimientos para ingresar directamente en la producción.

Por el lado de las garantías las opciones son los activos de los nuevos empresarios y/o el control de las actividades. Además, hay que considerar que la tasa de interés, dadas las condiciones del mercado financiero, son sumamente altas lo que implica que la retribución mínima a los préstamos será elevada.

# SENDERO LUMINOSO ACUSA LOS GOLPES

Para poder cumplir con dichas retribuciones se requerirá que los rendimientos del sector, en términos económicos sean elevados.

Todo ello se relaciona con un problema hasta ahora no tocado, la situación del agro, y en especial del azúcar, en el nuevo panorama económico nacional. Los precios internacionales así como las cuotas de exportación se vienen reduciendo, al mismo tiempo que internamente persisten el atraso cambiario y la apertura comercial indiscriminada. A pesar de la salida del Perú del Pacto Andino en el caso específico del azúcar no se consigue modificar sustantivamente esta tendencia.

La pregunta que deben haberse hecho muchos azucareros es cómo endeudarse enfrentando altas tasas de interés en esta actividad sin pensar en repetir el fracaso económico hasta ahora visto. Esta situación implicaría ahora no sólo una disminución drástica de sus recursos, sino que también los llevaría a la pérdida de la propiedad de la nueva empresa.

Los argumentos en favor de cambiar el sistema y de no hacerlo, probablemente, pueden ser ambos razonables pero no atacan lo central de la problemática. El cambio empresarial sólo constituirá una opción interesante y atractiva y no una simple ilusión, si va acompañada de un cambio en la política económica. Ella requiere la revalorización y potenciación del sector a través de políticas cambiarias y comerciales adecuadas.

**S**

in, disparar un tiro, el pasado 12 de setiembre fue capturado el líder máximo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. A un mes exacto de su caída, el grupo terrorista no encontró mejor forma de celebrar el

V Centenario que con el asesinato de 47 campesinos quechuas en la comunidad ayacuquina de Huayllao.

La masacre marcó en realidad el punto más alto de una escalada senderista en respuesta a la captura de su jefe. Sin embargo, a pesar de su ferocidad la ofensiva terrorista ha estado lejos de alcanzar los niveles previos al 12 de setiembre.

Para octubre-noviembre SL tenía programado el inicio de su VI Gran Plan, que debía comenzar con acciones tanto o más contundentes que las del mes de julio, cuando los coches-bombas y los asesinatos de civiles y policías aterrorizaron Lima y posibilitaron el éxito sin precedentes de un "paro armado" los días 23 y 24 de ese mes.

Esta vez, los "paros armados" debían incluir movilizaciones de masas en aquellos bolsos donde SL tenía presencia. En medio de la población se camuflarían unidades del Ejército Guerrillero Popular provistas de armas largas, que diezmarían cualquier contingente policial enviado a reprimir las movilizaciones. El objetivo: provo-

car una respuesta de las FFAA que, incapaz de concentrarse en las unidades del EGP, reprimiera a la población en su conjunto. El ansiado genocidio que Guzmán creía necesario para lograr el "equilibrio estratégico", volver ingobernable el país y provocar la intervención norteamericana.

Desde una jaula, el 24 de setiembre Guzmán llamó a sus seguidores a iniciar el VI Plan. Pero ante la serie de sismos que han seguido resquebrajando la estructura senderista después del gran terremoto del 12 de setiembre<sup>1</sup>, cumplir las directivas del jefe preso puede constituir una suicida huida hacia adelante.

Porque por vez primera el Estado tiene la iniciativa táctica, la capacidad de decidir dónde y cuándo golpear. A las capturas de setiembre se suman los "rastrillajes" en los bolsos urbanos donde SL había establecido cabeceras de playa sociales, con un alto número de capturados. Ahora son los senderistas quienes no saben cuántos otros nombres guardaban las computadoras capturadas a la alta burocracia de su "nuevo Estado", que operaba en los barrios de clase media de Lima.

Una fecha clave se aproxima: el 22 de noviembre, día de las elecciones al Congreso Constituyente. Si ellas se realizan sin que SL pueda perturbarlas significativamente, probará que ha sido puesto nuevamente a la defensiva estratégi-

**Carlos  
Iván  
Degregori**

1. Con Guzmán cayeron dos miembros del Comité Permanente del Comité Central: Elena Iparraguirre y Laura Zambrano, así como otros dirigentes nacionales. En días posteriores cayeron dirigentes regionales en Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Piura. El 17 de octubre cayó Martha Huatay, jefa del llamado Socorro Popular y encargada de reorganizar el Comité Metropolitano de Lima. El 26, la estructura militar recibió su primer golpe fuerte con la caída de tres importantes mandos militares regionales en Ayacucho

2. O en la unilateralidad de Vargas Llosa, para quien la captura de Guzmán es en última instancia una desgracia, porque consolida el gobierno de Fujimori. No advierte la diferencia cualitativa que existe entre la guerra contra el proyecto totalitario y el accionar genocida de SL, y el enfrentamiento al autoritarismo del actual gobierno.

3. Un gesto similar no se veía desde 1982, cuando el presidente Belaúnde visitó Vilcashuamán, arrasada por SL.

4. El Perú suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en San José de Costa Rica en 1969 y la ratificó en 1978. El Pacto de San José le impide ampliar la pena de muerte más allá de lo estipulado en la Constitución de 1979, que en su artículo 235 dice: "No hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior".

5. Académicos de renombre como la británica Rosemary Thorp, profesora de Boloña y miembro del **Peru Support Group**, o el belga Bruno Kervyn, editor del boletín **Qui-pu**. Personas que por convicción democrática y afecto al Perú enfrentaban hace tiempo a SL, llenando el vado dejado por la falta de iniciativa gubernamental en el exterior. Tal vez fueron incluidos porque, también por convicción democrática y afecto al Perú, criticaban asimismo las violaciones a los derechos humanos de los sucesivos gobiernos desde 1980.

ca, y esta vez sin siquiera iniciativa táctica.

También para el gobierno el 22 de noviembre es una fecha decisiva. La imposibilidad de derrotar a SL dentro de los marcos democráticos fue uno de los pretextos de Fujimori para el autogolpe del 5 de abril. Paradójicamente, la gran victoria que representó la captura del jefe senderista, la logró la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) con un trabajo impecable que sería alabado en la más exigente de las democracias.

Sin embargo, decir que los triunfos actuales del gobierno se deben únicamente a DINCOTE y su jefe, el Gral. Vidal, sería caer en la misma subestimación que perdió a Guzmán<sup>2</sup>. Podemos estar en desacuerdo con su contenido, pero es necesario reconocer que por primera vez el gobierno tiene una estrategia, que no es otra que aquella diseñada por las FFAA y que podemos definir como "autoritaria no-genocida".

Ya antes del autogolpe, la voluntad de enfrentar el terrorismo, sin duda con un sesgo autoritario, se expresó en el envío al Parlamento en noviembre de 1991 de 25 Decretos Legislativos sobre pacificación (la mayoría de ellos promulgados luego del autogolpe); el mayor apoyo a las rondasen el campo; la combinación de rastrellajes y asistencialismo a cargo de las FFAA en las ciudades; el apoyo a la apuesta de DINCOTE que apuntó a capturar la dirección de SL. Y, después del 5 de abril, en hechos que van desde la desarticulación de la organización de SL en las cárceles hasta la visita de Fujimori a Huayllao el 26 de octubre<sup>3</sup>.

No es democrática, pero tampoco es una estrategia genocida a la guatemalteca, que era el principal peligro en la si-

tuación caótica que vivía el país y ante la ferocidad provocadora de SL, empeñado en lograr una respuesta genocida. Pero la estrategia tiene un talón de Aquiles: su autoritarismo.

Luego de la captura de Guzmán y el positivo cambio de ánimo de la población, es la hora de la política, de organizar democráticamente a la población para enfrentar a SL. Pero ese es el punto ciego del gobierno, que prefiere el asistencialismo y el apoyo "plebiscitario". Por lo demás, el visceral antipoliticismo de Fujimori encaja con las concepciones de las FFAA, que conciben la unidad nacional no como un acuerdo democrático entre fuerzas distintas sobre puntos básicos concretos, sino como la movilización unánime de la población civil tras sus planes; confunden además la indispensable lucha ideológica contra SL con una "guerra psicológica" manipuladora de la opinión pública, que puede resultar contraproducente, tanto en el país como en el extranjero.

Así, luego de la presentación pública de Guzmán enjaulado y con traje a rayas, la empresa de opinión APOYO detectó un 16% de personas que sentían compasión por él. Ese espectáculo produjo reacciones adversas fuera del país, lo mismo que la *forma* en que se llevó a cabo el juicio a Guzmán y la posterior decisión de denunciar el Pacto de San José<sup>4</sup>, para poder aplicarle la pena de muerte.

Si todo esto puede verse como la utilización electoral de la captura, se advierte un lado más oscuro en la conducta de la "dictablanda". Poco después de la caída de Guzmán se publicaron listas de "embajadores del terror" en el extranjero, que junto a conocidos senderistas incluían a personalidades respetables<sup>5</sup>. Luego aparecieron listas en las que dirigentes populares democráticos eran presentados como miembros de SL. El mensaje: tú también

puedes ser terrorista, *cualquiera* puede serlo. Es la guerra psicológica, que azuza la paranoia y una caza de brujas que incluye a organismos de Derechos Humanos y "senderólogos".

Pero hay una dimensión todavía más siniestra, expresada en la aparición en Ayacucho del grupo MATA, amenazando a un amplio espectro de dirigentes y personalidades locales, y el reinicio de matanzas en la sierra central. 38 estudiantes de la Universidad del Centro desaparecieron en los últimos meses, recientemente la mayoría han sido encontrados muertos y con huellas de torturas. La explicación oficial: un imposible arreglo de cuentas entre SL y el MRTA. El secreto a voces: la reaparición de grupos paramilitares, el reinicio de la guerra sucia.

La estrategia antisubversiva se encuentra, pues, en una encrucijada. O se refuerzan sus aspectos más autoritarios o se articula el trabajo de inteligencia y la indispensable lucha militar contra SL, con una ofensiva política democrática a nivel nacional. Es necesario reconocer que muy poco han hecho los partidos democráticos por promover esta alternativa, lo cual implica enfrentar un problema muy difícil: su relegitimación en un contexto de guerra interna.

Sobre ese mar de fondo, un temor crece: que la guerra sucia y la caza de brujas se desenfrenen de triunfar los candidatos oficialistas. El miedo no es infundado si hoy se advierte que los constantes ataques de Fujimori al Parlamento y al Poder Judicial no fueron exabruptos sino parte de una campaña de ablandamiento que desembocó en el 5 de abril. ¿Qué nos espera después del 22 de noviembre?

Si bien la amenaza a su existencia misma se ha reducido drásticamente tras la captura de Guzmán y la mayor parte de la dirección nacional senderista, el futuro democrático del Perú sigue pendiendo de un hilo.

# A UN AÑO DEL PROGRAMA ECONOMICO DEL PERU ACORDADO CON EL FMI.

## ¿COMO ES QUE EL GOBIERNO APROBO EL EXAMEN?

R

ecientemente, el directorio del FMI (16.9.92) aprobó el cumplimiento de las metas acordadas para el primer semestre de 1992 del "programa de ajuste macroeconómico y estructural", esto es, la gestión económica del gobierno, así como un tanto tardíamente, los objetivos para el segundo semestre de 1992. Para intentar aclarar el significado de esta aprobación, puede ser útil comparar el contenido del Programa suscrito en 1991 con los resultados logrados por el gobierno a la fecha. Este ejercicio también es pertinente si se toma en cuenta que la vigencia del programa, "para lo que resta de 1992", ha sido reafirmada en la reciente carta de intención (del 8.9.92), al señalar que se continuarán aplicando "políticas consistentes con el programa original".

**Francisco  
Verdera**

### **E** l Programa en el papel

El 30 de setiembre de 1991, *El Peruano* publicó el "Programa Económico del Perú presentado ante el FMI", anunciando las medidas de política económica que el gobierno peruano se comprometía a realizar para el resto de 1991 y para 1992.

El documento empieza declarando que su objetivo es "mejorar el bienestar de la po-

blación, mediante el logro de mayores niveles de empleo y de salarios reales" y, en los antecedentes, reconoce que los servicios sociales se han deteriorado, aunque lo atribuye a que enfermeras y maestros, entre otras razones, "carecen de motivación y capacitación adecuadas", sin considerar siquiera como una referencia los bajísimos sueldos que perciben.

A tenor de los resultados, ninguno de los cuatro objetivos del programa para 1991 y 1992, convenientemente definidos para el "mediano plazo", han sido cumplidos a la fecha: (i) No se ha disminuido la inflación a niveles internacionales. Sobre este objetivo, Richard Webb (*El Comercio*, 4.10.92) ha sostenido que: "La inflación — a un ritmo de 58% anual en los últimos tres meses— continúa siendo una de las más altas del mundo actual... Más aún por la velocidad que mantienen las alzas de precios, por el embalse del tipo de cambio..."; (ii) No se ha logrado hacer viable la balanza de pagos, ni restablecido relaciones normales con la comunidad financiera internacional, en parte, como consecuencia del golpe del 5 de abril, tal como lo declaran frecuentemente representantes de los gobiernos de países europeos y de Estados Unidos; (iii) No ha aumentado el ahorro y la inversión internos ni crecerá el PBI, por lo contrario: de enero a agosto de 1992 el PBI real ha caído en -3.2% respecto al mismo período de 1991 y las reducciones del PBI de julio y agosto últimos son de -8% y -5.2%; (iv)

Tampoco ha mejorado el bienestar de la población. La prestación de servicios sociales (salud, educación y alimentación infantil) no se han restablecido a un nivel adecuado.

### **D**etrás del Programa

Lo que sí se ha seguido estrictamente es el *criterio de cómo supuestamente* lograr esos objetivos, a saber, aplicar una política fiscal y una política monetaria disciplinadas, mantener un tipo de cambio flotante y llevar a la práctica "medidas estructurales de gran alcance". Para no dejar dudas de que cumplirán estas tareas y como anuncio de lo que se venía, el Programa económico del gobierno nos recuerda entre "las medidas adoptadas hasta la fecha" (a setiembre de 1991), las "correcciones generalizadas de los precios de la gasolina y demás precios del sector público, reformas tributarias (que incluyen la introducción de varios impuestos de emergencia) y control estricto del gasto". En particular, este "control" significa la drástica reducción del gasto público social, lo que resulta contradictorio con el cuarto objetivo del propio programa ya citado, "Mejorar el bienestar de la población". También se incluye como *logro* del gobierno la creación del Programa de Emergencia Social (PES), que aunado a otras acciones, brindaría "asis-

tencia alimentaria (que) abarcaría a 7.5 millones de personas". Dada la dimensión de esta promesa se aclara que "hasta el momento el volumen de recursos disponibles ha resultado inferior al previsto".

## **E** l Programa inmediato

Olvidemos todo lo anterior —esta parte del documento podría considerarse declarativa o protocolar— y aceptemos que los objetivos del Programa que importan son sólo los inmediatos. Todo indicaría que ellos no se cumplirán: (i) No se va a lograr reducir la inflación a niveles internacionales antes del final de 1992 por lo que ya explicamos; (ii) El crecimiento del PBI real en efecto fue de 2.4% en 1991, como se anuncia en el documento en setiembre de 1991; sin embargo, este aumento relativo es un resultado estadístico motivado por el bajísimo nivel del PBI de 1990, consecuencia de la depresión causada por el shock de agosto. En cambio, el incremento del PBI real no será "del 3.5% en 1992", como se pronosticaba en setiembre de 1991. Las cifras indican que será alrededor de 7 puntos porcentuales menos, es decir, el 3.5% otra vez, pero negativo; (iii) No se han normalizado las relaciones con los acreedores externos a pesar de la captura de Guzmán. Lo mismo ocurre con el propio BID. Este organismo aprobó finalmente el esperado préstamo con sujeción a los sucesivos retrocesos políticos del gobierno, en su lenta y negociada aceptación de la convocatoria a elecciones de un congreso. Hasta la fecha, el BID no ha efectuado los desembolsos. a la espera de los resultados. de los comicios del 22 de noviembre próximo.

## **E** l Papel del Programa

A primera vista resulta difícil de aceptar que, pese a no cumplir los objetivos propuestos, la ejecución del programa por parte del gobierno ha sido aprobada por el FMI. Esta aparente inconsistencia entre los objetivos declarados y las acciones efectivas se explica en razón de que el gobierno ha cumplido el objetivo central que subyace al programa, y que consiste en la "estrategia para la reintegración al sistema financiero internacional". La base de esta aprobación es la recuperación de reservas internacionales netas (RIN), el pago de la deuda atrasada al BID así como de los vencimientos corrientes y la acumulación de los atrasos con el Banco Mundial y el propio FMI, acreedor y jurado examinador al mismo tiempo. Por cierto, debe recalcar que el grueso de los pagos de deuda está por hacerse y que lo cubierto hasta el momento ha sido posible gracias a desembolsos de los organismos internacionales y del grupo de apoyo. En tal sentido, la vigencia del objetivo de acumulación de RIN y la necesidad de un programa recesivo puede durar entre 5 y 10 años.

El programa ha sido cumplido a cabalidad en lo que se refiere a la aplicación de una disciplina fiscal y monetaria estricta. Ello significa en lo esencial la drástica reducción del gasto público social, el aumento de la presión tributaria vía impuestos indirectos (IGV y selectivo al consumo), una fuerte restricción del crédito del Banco Central (o control de la emisión primaria) y la fijación de metas trimestrales en la acumulación de reservas internacionales en el contexto de las metas monetarias. Esto es lo que exige y "monitorea" (léase supervisa) el FMI como "las metas del Programa", formando parte de la

"asistencia técnica solicitada" por el gobierno peruano. Aún aquí se puede cuestionar el logro de la meta de recaudación, en la medida que la recesión provocada por el propio Programa, pese a que se aumentan las tasas impositivas, mantiene estancado el volumen real de ingresos tributarios. Por ello los recursos fiscales para el pago de deuda externa provendrán de la contracción del gasto público social y de la reducción del "personal de todo el sector público". En síntesis, el gobierno ha logrado acumular los atrasos y pagar los vencimientos corrientes y se "prevé (la) total liquidación (de los adeudos) para el final de 1992". Este es el objetivo que interesa al FMI y de allí la aprobación.

## **P** rograma para rato

Al parecer en el mes de setiembre se ha observado la mayor reducción de las ventas del comercio minorista en mucho tiempo. Los stocks se acumulan y muchos empresarios no pueden hacer frente a sus obligaciones. Por otra parte, el IPC que publica el INEI pierde credibilidad, dada la antigüedad de la canasta (previa al shock de agosto de 1990) y las alzas que la población padece. La aprobación de la gestión del gobierno por parte del FMI no significa que la situación actual vaya a mejorar. Por tanto, no puede ni podrá producirse la tan ansiada reactivación económica, ni tampoco la congelación del precio de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos y mucho menos se puede esperar la recuperación del gasto público social.

Mientras exista deuda externa que pagar — que por lo de más viene incrementándose—, tendremos el mismo Programa para varios años y, probablemente, su acentuación después de las elecciones.

# EL CUESTIONAMIENTO A LOS POLITICOS TRADICIONALES

**C**on el derrumbe de los regímenes totalitarios del Este la democracia parecía afirmarse como aspiración o valor compartido en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, en un lapso histórico inusitadamente breve el orden de convivencia que surgía como vencedor se encuentra jaqueado.

Un estilo de toma de decisiones que antes se aceptaba — aunque con frecuencia no suscitara mayores entusiasmos — se encuentra ahora cuestionado. Quizás todavía no se ha llegado a una situación crítica pero la llamada clase política se encuentra cada vez más solitaria en la escena y sus palabras no convencen a un público hostil o indiferente. Las razones no son las mismas en los países desarrollados, los del Este y los de América Latina y en particular el Perú. Sin embargo confluyen en la creación de un ambiente enrarecido donde los desenlaces no son tan seguros como podíamos imaginar poco tiempo atrás

## **E**l elusivo mundo partidario

El sociólogo italiano Paolo Flores D'Arcais en un artículo polémico y sugerente<sup>1</sup> recordaba que Pier Paolo Pasolini "llama-

ba palacio al mundo de los partidos, evasivo, inaferrable e impenetrable para el ciudadano como un castillo kafkiano". Flores entiende que estamos ante el fin de los períodos de alternancia política ordenada entre gaullistas y socialistas en Francia o el juego sin fin de formación de coaliciones entre democristianos y socialistas en Italia. Los políticos son "ellos", parecidos unos a otros y extraños y extrañados de la comunidad. El deseo de cambio por parte de algunos sectores de la sociedad no mejora las cosas. Las propuestas que comienzan a tener vigencia son las que provienen de movimientos regionalistas intolerantes o aun de partidos de orientación xenófoba y en algunos casos neonazis.

Este comentarista caracteriza la crisis en la Europa desarrollada como de "inobservancia". Ella ocurre cuando "la política se hace propiedad-monopolio de una casta específica" convirtiendo la democracia en una farsa. El autor es suficientemente lúcido para rechazar la democracia directa, por ser inaplicable en sociedades complejas y reconocer que el rechazo a las instituciones representativas es la estrategia y el recurso de las "nomenklaturas" o de los salvadores providenciales que precipitan salidas autoritarias. Flores propone establecer un sistema que asegure rotaciones en el poder. A su criterio debe limitarse la renovación de los mandatos de los congresistas a no más de dos legislaturas. Es conveniente tam-

bién que los parlamentarios no puedan ser ministros y quienes accedan a este último cargo se les inhiba de aspirar a ser legisladores. Finalmente, los militantes deberían hacer valer sus derechos en los partidos.

## **L**os débiles compromisos sociales

La consistencia del planteamiento de Flores obliga a tomarlos con seriedad y, al mismo tiempo, no encandilarnos con su argumento cuando estamos viviendo en un país como el nuestro.

La discusión actual sobre el papel de los políticos profesionales en la Europa desarrollada está asociada a la crisis del estado de bienestar. Este escenario exigía que las agendas políticas estuvieran controladas por los partidos, las burocracias estatales especializadas y eficientes, y por los gremios empresariales y obreros.

El pacto social así establecido demostró, sin embargo, una primera condición de fragilidad. La negociación resultaba restringida a las corporaciones constituidas. Quedaban al margen movimientos que buscaban rescatar derechos y revalorizar la vida cotidiana, entre ellos las demandas de las minorías étnicas, las reivindicaciones ecologistas y de la mujer y la exigencia de los homosexuales de po-

1. Paulo Flores D'Arcais. "Un ideal hecho farsa." *El País*, 18 de junio de 1992, Madrid.

ner fin a las políticas discriminatorias. Estas primeras expresiones de la crisis de los compromisos se expresan ahora mucho más severamente, cuando la flexibilidad laboral diluye las identidades de clase y el conflicto se expresa en términos mucho más extremos que en la etapa anterior, enfrentando a, "marginados" contra "excluidos".

Las migraciones masivas desde los países pobres y la creciente, marginación de los jóvenes exacerba la intolerancia de nuevos líderes conservadores, que cuentan a veces con el apoyo de lo que eran las bases sociales de una izquierda en crisis.

Los políticos profesionales han incurrido en actos de, desidia y de corrupción, pero con todos sus defectos, van a encontrarse menos predispuestos al racismo y otras expresiones de discriminación.

## **L**a desubicación de los partidos

Los cambios en la conducta y los valores de la clase política tienen que ser urgentes. La democracia como sistema requiere no sólo respeto por reglas y procedimientos sino transparencia en los actos y voluntad de vincularse a la sociedad. De lo contrario, llegará por fin el turno a líderes que fortalecerán los particularismos, la arrogancia nacionalista o regional y el desprecio a quienes son diferentes.

En Europa del Este y en América Latina a diferencia de Europa Occidental el problema central e impostergable es la construcción y la consolidación del régimen político. En nues-

tra región, la crisis que comienza a partir de los 80 ha desbaratado las identidades colectivas, entre ellas las políticas, desestructurado a los actores sociales y provocado el desencanto con la democracia. Escapa a este comentario considerar esta vasta problemática.

En el caso particular del Perú, las circunstancias parecen condenarnos a no pensar en el mediano plazo. A los partidos se les ha angostado el espacio y acortado el tiempo para plantear demandas, presentar propuestas, fiscalizar los actos del gobierno. El desprestigio deliberado contra la clase política por parte del gobernante de facto pretende colocar en el plano de las decisiones relevantes únicamente al titular del ejecutivo y a las Fuerzas Armadas, invocando el apoyo de una opinión pública cada vez menos entusiasta pero sin referentes alternativos. Y por otro lado, Sendero Luminoso, a pesar de sus recientes derrotas, seguirá procurando ganar por el temor lo que no puede conquistar a nivel del convencimiento.

Los ciudadanos precinden de las organizaciones sociales cuando más las necesitan si quieren evitar la polarización. Los partidos deben renovarse pero evitando apuestas simplistas, entre ellas la de suponer que el cambio de la clase política tradicional va a ocurrir por medio de la democratización de los partidos. Lo primero no depende necesariamente de lo segundo.

Los líderes tradicionales están probablemente en condiciones de imponer sus candidatos porque ellos son los que conocen los mecanismos para establecer alianzas con cuadros intermedios y militantes de base. Al mantenimiento de una situación sin cambios puede otorgarse así una formalidad presuntamente democrática.

Los dirigentes reelectos en sucesivas legislaturas — el cen-

tro mismo de la denostada clase política — se muestran por lo general como los más dispuestos a intervenir en temas institucionales, de políticas económicas, de fiscalización del ejecutivo y proclives asimismo a concertar con otras organizaciones. Ellos son también los que pueden enfrentarse eventualmente a las jefaturas personalizadas de los partidos con menores costos que un militante de base. En contraste, buscan por todos los medios perpetuarse en el ejercicio del poder, descuidan representar a sus electores por las seguridades que les otorga ser conocidos y no les interesa impulsar a nuevos dirigentes partidarios, especialmente jóvenes y mujeres.

## **L**os riesgos de la intolerancia

La crítica a los políticos profesionales debe moverse en un cuidadoso equilibrio entre reconocimiento de los saberes adquiridos y los riesgos del enquistamiento en el poder y en ocasiones, la corrupción. Las organizaciones deben ser capaces de compatibilizar criterios mínimos de estabilidad con renovación de personas y de ideas.

Los políticos profesionales, fáciles blancos de las críticas, están obligados a una actitud abierta e innovadora, tanto en sus organizaciones como con respecto del conjunto de la sociedad. El ataque al Parlamento y a las organizaciones representativas, han sido preámbulos para los populismos y las regresiones autoritarias. A las dirigencias partidarias y a los intelectuales les corresponde que no se haga sentido común en las mayorías, en una coyuntura dramática es la que los argumentos son difíciles de sustentar y los plazos apremian.